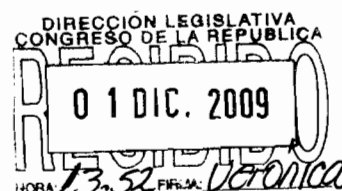




00000062

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

DICTAMEN



HONORABLE PLENO

Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil nueve, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la *Comisión de Finanzas Públicas y Moneda* la Iniciativa de Ley con Registro Número 4145 de Dirección Legislativa, que dispone aprobar **Disposiciones de Apoyo Financiero a Gobiernos Municipales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana**, el cual fue presentado por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 183, literal g), de la Constitución Política de la República, con la finalidad de que cada integrante de éste **órgano técnico legislativo** estudie, analice y se pronuncie sobre el particular.

I. ANTECEDENTES

En virtud que la Constitución Política de la República de Guatemala, invoca los valores de solidaridad en varios de sus preceptos, indicando además que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común, instituida en el régimen económico y social de la República de Guatemala en principios de justicia social, encomendando al Estado el logro de la equitativa distribución del ingreso nacional. Asimismo, establece que ***es deber de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos para cumplir con los mandatos constitucionales.***

Estos preceptos constitucionales fundamentan la puesta en marcha de *políticas, estrategias y acciones* para que toda la población disponga de las condiciones de vida digna. Dos de los principales pilares, de la lucha contra la pobreza y pobreza extrema, es la inversión que realiza el Estado en la atención de la *salud y la educación*. Para ello *el gobierno de la República cuenta con recursos limitados para hacer frente a aquellos gastos de funcionamiento e inversión* que son indispensables para generar las condiciones mínimas, para que la población cuente con los servicios públicos adecuados, tanto en educación, en salud, en seguridad, desarrollo rural, justicia, infraestructura, seguridad alimentaria y, en general, al ***gasto social público con calidad.***

El ***Pacto Fiscal, los Acuerdos de Paz y el Plan Visión de País*** señalan que el Estado *debe promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar la equitativa distribución del ingreso y contribuir, por medio del gasto social, a aliviar la situación de los sectores más empobrecidos.*

Asimismo, indica que ***la política fiscal es uno de los mecanismos redistributivos***



00000063

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

del ingreso a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas, permite un escenario macroeconómico estable, promotor del empleo y activador de la inversión. Se constituye además en *satisfactor de las necesidades básicas, instrumento financiero de la descentralización administrativa y del fortalecimiento de la participación civil en la toma de decisiones respecto a las obras y proyectos en el ámbito local.*

En tal virtud el contenido de la Iniciativa incursiona en los términos siguientes:

- a) *Impuesto de Solidaridad*: reforma el tipo impositivo de impuesto, pasando del 1% al 2%. Esta disposición, *además de profundizar el fortalecimiento del Impuesto Sobre la Renta*, generaría ingresos adicionales que *permitirían financiar los destinos específicos propuestos para las municipalidades, el Ministerio de Educación y desarrollo rural.*
- b) *Impuesto Sobre la Renta*: reforma el tipo impositivo del régimen general de este impuesto, pasando del 5% al 6%. Esta disposición *contribuirá a homologar el tratamiento impositivo para los contribuyentes de los regímenes General y Optativo del Impuesto*, tomando en consideración la reforma al tipo impositivo del Impuesto de Solidaridad.
- c) *Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo*: reforma la tarifa del Impuesto de Timbres Fiscales, pasando de 3% a 6%. Esta disposición generaría ingresos adicionales que *permitirían financiar el destino específico propuesto para seguridad ciudadana.* Propone que la tarifa específica del Impuesto al Papel Sellado Especial para Protocolos sea de diez quetzales (Q 10.00). Asimismo establece trasladar la administración del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo, del Ministerio de Finanzas Públicas a la Superintendencia de Administración Tributaria.
- d) *Impuesto a la Telefonía Móvil*: impuesto que se genera por la operación del tráfico de telefonía móvil por los sujetos pasivos, *operadores autorizados y registrados en Guatemala.* El tipo impositivo que se establece es de quince centavos de quetzal (Q 0.15), por cada minuto que dure el tráfico telefónico que se genere en la red de telefonía móvil operada por los sujetos pasivos, tomando en cuenta el volumen del tráfico actual de telefonía móvil, y las metas de recaudación que se proyectan de impuesto. *La base imponible es la cantidad de minutos de tráfico telefónico generado en la red de telefonía móvil a cargo del sujeto pasivo durante el periodo impositivo, el cual será mes calendario.* El período de imposición mensual resultará conveniente por ser usual en otros impuestos, el cual facilita un flujo estable de recursos para el Estado. En materia de infracciones y sanciones, le será aplicable la normativa general del Código Tributario, lo cual se regula en forma específica. La aplicación, recaudación, control y fiscalización del impuesto corresponderá a la Superintendencia de Administración Tributaria - SAT-, quien puede pedir apoyo técnico e información a la Superintendencia de



00000064

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Telecomunicaciones. Adicionalmente, dichas entidades deben intercambiar información que permita verificar el tráfico de telefonía móvil efectivamente operado por los sujetos pasivos.

Finalmente, se plantea una reforma al Código Penal, en lo relativo al Delito de Defraudación Tributaria, para adicionar como un *caso específico de defraudación la alteración de los registros detallados de llamadas*, para hacer congruente la normativa con el impuesto.

II. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Es evidente que pocas dudas caben con relación de que *el mundo enfrenta su peor crisis desde los años treinta*. El extendido aumento de la incertidumbre dificulta la vuelta a la normalidad, en este contexto, se agrava paulatinamente el cuadro recesivo derivado de la enorme pérdida, a su vez, este cuadro sumamente negativo afecta las expectativas, y *ocasiona un deterioro de los mercados de trabajo y una caída de la inversión y del consumo*.

Tal y como lo señalan los *Centros de Pensamiento y Organismos Internacionales*, los países del continente americano han reaccionado con *medidas* por un lado entre aquellas orientadas a restaurar la confianza y poner en funcionamiento los mercados financieros y por otro, aquellas cuyo objetivo es apuntalar la debilitada demanda agregada. Entre las *medidas* se destacan las orientadas a las categorías siguientes: a) Política monetaria y financiera; b) Política fiscal; c) Política cambiaria y de comercio exterior; d) Políticas sectoriales; e) Políticas laborales y sociales; y f) Financiamiento multilateral.

Es decir que el abanico de medidas *anunciadas e implementadas* es bastante amplio, no solo porque los impactos de la crisis *difieren de un país a otro*, y por lo tanto *también difieren los instrumentos para contrarrestarlos*, sino además por las *diferencias que se observan en relación con la capacidad de cada país, determinada por la disponibilidad de recursos*, para llevar adelante distintas iniciativas.

Sí bien es cierto que es necesario asegurar la liquidez y permitir que la tasa de interés sea lo más baja posible, pero más liquidez no garantiza un aumento de la oferta de crédito y una mayor oferta de crédito tampoco garantiza un incremento de la demanda de bienes. Si bien la política monetaria y aun la cambiaria deben formar parte de un conjunto ordenado y coherente de medidas, *es la política fiscal la más potente en estos casos*.

Por otra parte, *tampoco da lo mismo cualquier tipo de política fiscal*. En primer lugar, *las medidas orientadas a aumentar el gasto tienen mayor potencial* que aquellas basadas en una disminución de impuestos. Las primeras implican un aumento directo de la demanda, en



00000065

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

cambio las segundas generan un aumento del ingreso disponible del sector privado que, en una coyuntura tan incierta como la imperante, es altamente probable que se ahorre en una proporción elevada.

No obstante, es importante considerar, **que es conveniente elaborar planes de gasto y poner en marcha proyectos de inversión adecuadamente evaluados, a fin de promover un uso más eficiente de los recursos públicos.**

Y considerando que el gobierno de Guatemala ha promovido acciones orientadas a cumplir los preceptos constitucionales de gratitud y universalidad de la **educación y la salud**. Fundamentalmente en **ampliar la oferta de cobertura, tiempos y calidad de la educación y la salud, como medio para asegurar una solución real y de largo plazo de los principales problemas económicos y de seguridad**. La viabilidad de este plan expansivo de educación y salud *depende de la disponibilidad de recursos para financiar de forma recurrente los programas conexos*. Sin embargo, una mejora en la calidad de la educación y la salud es un proceso que inicia por el **reconocimiento, por parte del Estado, de la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura y logística con que se desarrolla el proceso de prestación de servicios en el ámbito de la educación y la salud en Guatemala, en tal sentido es necesario tomar acciones para orientar recursos adicionales para fortalecer las acciones dentro del sector**

La resolución de la **problemática agraria y el desarrollo rural** es fundamental e ineludible para dar respuesta a la situación de la *mayoría de la población que vive en el medio rural* y es que es la *más afecta por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales*. La *transformación de la estructura de la tenencia y uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político*, a fin que la tierra constituya para quienes la trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Es evidente que en el área rural es necesaria una **estrategia integral** que facilite el acceso a la tierra a los campesinos y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos. Las desigualdades sociales, la pobreza y el hambre requieren de un esfuerzo para articular e implementar la política nacional de desarrollo rural integral, la cual busca promover el acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el área rural.

En cuanto a la **seguridad ciudadana**, la vulnerabilidad de los sectores sociales desposeídos del país, ante el avance de las fuerzas internacionales asociadas al crimen organizado y al narcotráfico, requieren del gobierno una respuesta más ágil y contundente. Esta respuesta sin embargo, **exige**



00000066

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

por su parte recursos adicionales para financiar el acuerdo nacional para el avance de la seguridad y justicia.

Por otra parte, el artículo 257 de la Constitución Política de la República, dispone que el Organismo Ejecutivo debe asignar anualmente a las **municipalidades** el 10% de los **ingresos ordinarios** del Estado. Otras fuentes importantes de ingresos de las municipalidades son *las transferencias realizadas por el organismo ejecutivo que se originan en los destinos específicos de algunos impuestos*; las restantes *fuentes recurrentes de ingresos* de las municipalidades incluyen el **Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-**, *tasas, arbitrios, y la prestación de servicios*. Por lo anterior el Estado *siguiendo el objetivo de reorientar el desempeño de los fondos económicos* de compensación social, busca apoyar la inversión pública realizada por las municipalidades. De esta forma, se lograra atender las demandas de las comunidades en cuanto a ser constructores de las soluciones de sus problemas particulares. **La consecución de este objetivo requiere recursos recurrentes adicionales que fortalezcan los presupuestos de funcionamiento de las municipalidades, así como sus programas de apoyo en educación, agua y saneamiento, y desarrollo rural, como parte del proceso de descentralización administrativa del Estado y del reconocimiento de la importancia económica de los proyectos de inversión definidos y ejecutados al nivel local.**

En particular también se considera que *el gravamen sobre el Papel sellado especial para protocolos es oneroso para el Estado, toda vez que su costo de elaboración, administración y percepción sin considerar costos de control y fiscalización, es significativamente mayor a lo que recauda por lo que no cumple con los principios tributarios de economía y productividad*. Asimismo, las estadísticas muestran que el sector de la telefonía móvil ha mostrado tasas de crecimiento altas en Guatemala, lo cual se ha traducido en *beneficios individuales, los cuales también deben rendir beneficios macroeconómicos y de impacto social general*. Para el caso del gravamen al Impuesto de Solidaridad, dicha medida reforma el tipo impositivo, al tiempo que profundiza el fortalecimiento del Impuesto Sobre la Renta y este a su vez reforma el tipo impositivo del régimen general que contribuye a homologar el tratamiento impositivo para los contribuyentes de los regímenes General y Optativo tomando en consideración la reforma al tipo impositivo del Impuesto de Solidaridad.

Cabe añadir, que dichas medidas tienen **un impacto fiscal positivo**, ya que *están claramente orientadas a un segmento poblacional en particular de índole social*.

Y en virtud que dentro de los fundamentos constitucionales esta establecido que corresponde también al Congreso de la República: decretar, reformar y derogar las leyes; decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su



00003067

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

recaudación. Asimismo, que dicha iniciativa es coherente con lo que establece la Ley de Presupuesto, y, otras ordinarias y reglamentarias.

Considerando las opiniones favorables del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, a quien de conformidad con su Ley Orgánica contenida en el Decreto número 1-98 del Congreso de la República de Guatemala le corresponde asesorar al Estado en materia de política fiscal y legislación tributaria y proponer por conducto del Organismo Ejecutivo las medidas legales necesaria para el cumplimiento de sus fines, según el artículo 3 de la Ley citada.

También se observa que para el caso de la *propuesta* del Impuesto sobre Telefonía Móvil, la información utilizada por el Ministerio de Finanzas Públicas -MFP- para establecer el tipo impositivo, hecho generador, sujeto pasivo y base imponible, *se sustentó en el Informe de la Consultoría Técnica de Apoyo a la Elaboración del Proyecto de Ley del Impuesto a la Telefonía Móvil, dentro del Proyecto PNUD 69255 "Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Modernización Fiscal"*.

Así como los dictámenes de la Dirección Técnica de Presupuesto -DTP- y de la Asesoría Jurídica -*este último incluye visto bueno, emitido por la Procuraduría General de la Nación-*, ambos del Ministerio de Finanzas Públicas.

Finalmente el Dictamen de Dirección General de Asesoría y Cuerpo Consultivo, de Secretaria General de la Presidencia de la República.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que no hay contradicción con normas constitucionales ni ordinarias pues pretenden elevar algunos tipos impositivos, asimismo señala el destino de los ingresos que se percibirán, los cuales también están acordes con los fines y funciones del Estado.

III. DICTAMEN DE LA COMISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión es del criterio que la Iniciativa de Ley que dispone aprobar *Disposiciones de Apoyo Financiero a Gobiernos Municipales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana*, remitido por el Organismo Ejecutivo, ***es congruente con las necesidades sociales, posibilidades financieras y objetivos de la política económica del país***, por lo que, se emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa 4145 que aprueba *Disposiciones de Apoyo Financiero a Gobiernos Municipales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana*, elevándose a consideración del Honorable Pleno para que, de merecer su aprobación se convierta en Ley de la República.



00000068

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, A LOS Veinticinco DIAS DEL MES DE Noviembre DEL AÑO DOS MIL NUEVE.



MARIO TARACENA DIAZ-SOL
PRESIDENTE

JUAN RAMÓN PONCE GUAY
VICEPRESIDENTE

LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES
SECRETARIO



OSWALDO IVAN AREVALO BARRIOS



PEDRO PABLO PALMA LAU

JOSÉ INÉS CASTILLO MARTÍNEZ

SERGIO LEONEL CELIS NAVAS



ROBERTO KESTLER VELASQUEZ

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS



00000069

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

HUMBERTO LEONEL SOSA MENDOZA

JORGE MÉNDEZ HERBRUGER



MANUEL DE JESUS BARQUIN DURAN

LEONARDO CAMEY CURUP



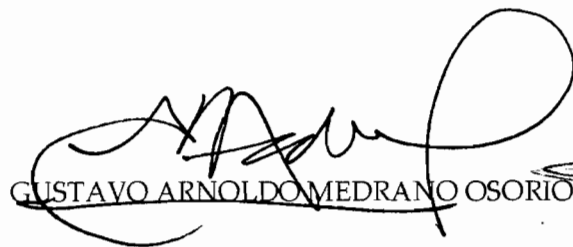
WILLIAM RUBEN RECINOS SANDOVAL

MARIO ISRAEL RIVERA CABRERA

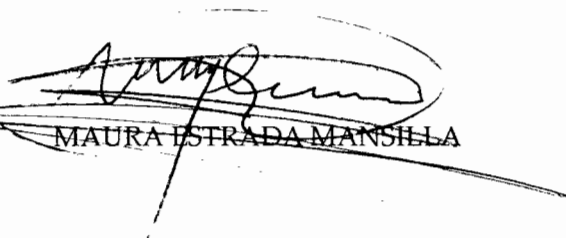
MANUEL EDUARDO CASTILLO ARROYO



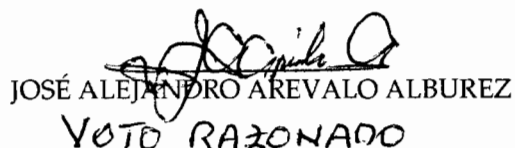
MARVIN ORELLANA LOPEZ



GUSTAVO ARNOLDOMEDRANO OSORIO



MAURA ESTRADA MANSILLA



JOSÉ ALEJANDRO AREVALO ALBUREZ
VOTO RAZONADO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO



00000070

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DECRETO NÚMERO

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República obliga a observar el principio de solidaridad al establecer que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común de los guatemaltecos bajo el mandato de guardar conducta fraternal entre sí, y ordena a los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, para que el régimen económico y social de Guatemala alcance el desarrollo fundado en principios de justicia social, en un contexto de estabilidad con crecimiento acelerado y sostenido. . .

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento a las obligaciones que le impone al Estado la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de inversión social, educación, salud, desarrollo rural, seguridad, ciudadana y descentralización, es impostergable el fortalecimiento de la recaudación tributaria, que permita al Estado contar con los recursos necesarios para el financiamiento de los programas orientados a atender a la población más necesitada.

CONSIDERANDO

Que es imprescindible la reforma a normas tributarias que permita una recaudación eficiente del Impuesto de Solidaridad, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos y la creación de un Impuesto a la Telefonía Móvil, competencia que la Constitución atribuye al Congreso de la República.

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confieren las literales a) y c) del artículo 171 y con fundamento en el artículo 239, ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala,



00000071

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DECRETA:

Las siguientes:

**DISPOSICIONES DE APOYO FINANCIERO A GOBIERNOS MUNICIPALES, EDUCACIÓN,
SALUD, DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD CIUDADANA**

CAPITULO I

**REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD, DECRETO 73-2008 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA.**

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 8 el cual queda así:

"Artículo 8. Tipo Impositivo. El tipo impositivo de este impuesto es del dos por ciento (2%).

De la recaudación resultante de la aplicación del tipo impositivo se destinarán:

1. Entre las municipalidades de la República:

- a. En el ejercicio fiscal dos mil diez, el monto correspondiente a medio punto porcentual (0.5%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%).
- b. Del ejercicio fiscal dos mil once en adelante, el monto correspondiente a un cuarto de punto porcentual (0.25%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%).

Esta asignación será distribuida con la periodicidad y los criterios establecidos en el Código Municipal para la asignación que establece el artículo 257 de la Constitución Política de la República.

Cada municipalidad a su vez destinará la asignación establecida conforme este artículo de la siguiente forma: hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) para gastos de funcionamiento y atención del pago de prestaciones y jubilaciones; y por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) para apoyar el financiamiento de sus programas de educación, salud, programas de agua y saneamiento, inversiones productivas y de infraestructura física.

2. Para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:

- a. En el ejercicio fiscal dos mil diez, el monto correspondiente a un cuarto de punto porcentual (0.25%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%).



00000072

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- b. En el ejercicio fiscal dos mil once, el monto correspondiente a una décima y media de punto porcentual (0.15%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%).
- c. Del ejercicio fiscal dos mil doce en adelante, el monto correspondiente a una décima de punto porcentual (0.10%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%).

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social destinará prioritariamente estos recursos para la remuneración del personal a cargo de la extensión de cobertura de los servicios de salud, atención primaria en salud y recuperación y rehabilitación de la salud.

- 3. El monto correspondiente a una décima de punto porcentual (0.1%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%) se asignará para programas de inversión productiva en el área rural, asistencia alimentaria y apoyo a la economía campesina.
- 4. El monto correspondiente a una décima de punto porcentual (0.1%) del tipo impositivo del dos por ciento (2%) se asignará para apoyar financieramente la implementación del Acuerdo para el Avance de la Seguridad y la Justicia. Los recursos que se asignen al Ministerio de Gobernación se priorizarán para financiar el funcionamiento de los servicios de seguridad ciudadana, formación de recursos humanos de la Policía Nacional Civil y servicios de inteligencia civil."

CAPITULO II

**REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECRETO 26-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS**

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 44 el cual queda así:

"ARTICULO 44. Tipo impositivo y régimen para personas individuales y jurídicas que desarrollan actividades mercantiles y otros entes o patrimonios afectos. Las personas individuales o jurídicas constituidas al amparo del Código de Comercio, domiciliadas en Guatemala, así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las agropecuarias, deberán pagar el impuesto aplicando a su renta imponible, a que se refiere al artículo 37 "B", un tipo impositivo del seis por ciento (6%).

Dicho impuesto se pagará mediante el régimen de retención definitiva y a falta de ésta directamente a la Administración Tributaria, de conformidad con las normas que se detallan en los siguientes párrafos. Estas personas, entes o patrimonios deberán indicar en las facturas que emitan, que están sujetos a retención del seis por ciento (6%).



*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio u otras leyes, y que paguen o acrediten en cuenta, rentas a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles con inclusión de las agropecuarias, retendrán sobre el valor de los pagos el seis por ciento (6%), en concepto de Impuesto Sobre la Renta, emitiendo la constancia de retención respectiva. Las retenciones practicadas por las personas individuales o jurídicas a que se refiere este artículo, deberán enterarse a las cajas fiscales conforme lo establece el artículo 63 de esta ley.

Si el contribuyente vende bienes, presta servicios o realiza su actividad mercantil con personas individuales que no lleven contabilidad, o si no se le hubiere retenido el impuesto, deberá aplicar el tipo impositivo del seis por ciento (6%) sobre los ingresos gravados que no fueron objeto de retención, y pagar el impuesto directamente a la Administración Tributaria, en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a aquel en que emitió la factura respectiva, utilizando los formularios que proporcionará la Administración Tributaria al costo de su impresión o por los medios que ésta determine.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, previo aviso a la Administración Tributaria, podrán optar por el régimen de pago del impuesto previsto en el artículo 72 de esta ley".

ARTÍCULO 3. Se reforma el artículo 44 "A" el cual queda así:

"ARTICULO 44 "A". Tipo impositivo y régimen para personas individuales o jurídicas no mercantiles. Las personas individuales que presten servicios profesionales, servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento y los que obtengan ingresos por concepto de dietas, así como las personas jurídicas no mercantiles domiciliadas en el país que presten servicios técnicos o de naturaleza no mercantil, o servicios de arrendamiento, deberán pagar el impuesto aplicando a la renta imponible a que se refiere el artículo 37 "B" de esta ley, el tipo impositivo del seis por ciento (6%).

Dicho impuesto se pagará mediante el régimen de retención definitiva y a falta de ésta directamente a la Administración Tributaria, de conformidad con las normas que se detallan en los siguientes párrafos. Los contribuyentes a que se refiere este artículo indicarán en las facturas que emitan, que están sujetos a retención del seis por ciento (6%).

Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio u otras leyes, y que paguen o acrediten, en cuenta, rentas a personas individuales o jurídicas no mercantiles, domiciliadas en el país, que presten los servicios indicados en el primer párrafo de este artículo, retendrán sobre el valor de los pagos o acreditamientos el seis por ciento



00000074

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

(6%) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, debiendo emitir la constancia de retención respectiva. Las retenciones practicadas por las personas individuales o jurídicas a que se refiere este artículo, deberán enterarse a la Administración Tributaria, conforme lo establece el artículo 63 de esta ley.

Cuando las personas descritas en el primer párrafo de este artículo presten servicios a personas individuales que no lleven contabilidad completa, o cuando por cualquier causa no se les hubiere retenido el impuesto, deberán aplicar el tipo impositivo del seis por ciento (6%) sobre los ingresos gravados que no fueron objeto de retención y pagar el impuesto directamente a la Administración Tributaria, en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a aquél en que emitió la factura respectiva o percibió el ingreso, lo que ocurra primero, utilizando los formularios que proporcionará la Administración Tributaria, al costo de su impresión o por los medios que ésta determine.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, previo aviso a la Administración Tributaria, podrán optar por el régimen de pago del impuesto previsto en el artículo 72 de esta ley".

CAPITULO III

REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES Y DE PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA PROTOCOLOS, DECRETO 37-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS.

ARTÍCULO 4. Se reforma el Artículo 4 el cual queda así:

"ARTICULO 4. La tarifa del impuesto. La tarifa del impuesto es del seis por ciento (6%). El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos.

El valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales.

De la recaudación de este impuesto, generada hasta por tres puntos porcentuales (3%) de la tarifa del seis por ciento (6%), se asignarán específicamente en el año dos mil diez la cantidad de cien millones de Quetzales (Q. 100,000,000.00) para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social destinará prioritariamente estos recursos para la remuneración del personal a cargo de la extensión de cobertura de los servicios de salud, atención primaria en salud y recuperación y rehabilitación de la salud.

En caso la recaudación correspondiente a tres puntos porcentuales (3%) del tipo impositivo del seis por ciento (6%) sea menor al monto establecido en el párrafo anterior, la recaudación efectiva correspondiente a esos tres puntos porcentuales será la asignación específica al Ministerio de



00000075

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Salud Pública y Asistencia Social. Si la recaudación correspondiente a esos tres puntos porcentuales (3%), de la tarifa del seis por ciento (6%) excede esta asignación específica, los recursos en exceso se trasladarán a la cuenta Gobierno de la República Fondo Común."

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 6 el cual queda así:

"ARTICULO 6. De la tarifa específica del Impuesto de Papel Sellado Especial para Protocolos. Se establece un Impuesto de Papel Sellado Especial para Protocolos, con una tarifa específica de diez quetzales (Q. 10.00) por cada hoja, y sujeta a los controles de fabricación, distribución y venta regulados por esta ley".

ARTÍCULO 6. Se reforma el artículo 23 el cual queda así:

"ARTICULO 23. De la fabricación, control, distribución y venta. La Administración Tributaria se encargará de la fabricación de Timbres Fiscales, y de Papel Sellado Especial para Protocolos, para lo cual podrá celebrar contratos de suministro con entidades nacionales o extranjeras.

De lo recaudado por la venta de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, se deducirá el costo de su fabricación, distribución y venta.

El reglamento establecerá todo lo relativo a los procedimientos de fabricación, custodia, distribución, mantenimiento, existencia y destrucción de especies fiscales. Las características de los Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos podrán ser modificadas por la Administración Tributaria, para adaptarlos a los nuevos métodos y técnicas de producción y utilización.

La Administración Tributaria podrá suscribir convenios con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para optimizar la distribución y venta de Papel Sellado Especial para Protocolos. La Administración Tributaria establecerá lo relativo a los procedimientos y controles para su distribución y venta."

ARTÍCULO 7. Se deroga el artículo 24.

CAPITULO IV

IMPUESTO A LA TELEFONÍA MÓVIL

ARTÍCULO 8. Materia del Impuesto. Se decreta un impuesto al tráfico de telefonía móvil generado en la red del sujeto pasivo.

ARTÍCULO 9. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:



Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- 1) **Telecomunicación:** Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medio óptico u otro sistema electromagnético.
- 2) **Telefonía móvil:** Telecomunicación destinada principalmente al intercambio de información por medio de la palabra, datos, sonidos, imágenes y música, que permite la movilidad del dispositivo transmisor-receptor, mediante una red de acceso inalámbrica.
- 3) **Operador de telefonía móvil:** Persona individual o jurídica que posee o administra una red de telecomunicaciones de telefonía móvil, y que deba inscribirse en la Superintendencia de Telecomunicaciones como operador de red comercial.
- 4) **Tráfico de telefonía móvil:** Flujo de telefonía móvil, generado en la red a cargo de un operador de telefonía móvil, medible en minutos o fracción de minuto.

El tráfico de telefonía móvil total de un operador es la suma de las modalidades siguientes:

- a) El tráfico generado en la red de telefonía móvil a cargo del sujeto pasivo, terminado en redes fijas a cargo de otros operadores de telefonía, en minutos.
 - b) El tráfico generado en la red de telefonía móvil a cargo del sujeto pasivo, terminado en redes móviles a cargo de otros operadores de telefonía móvil, en minutos.
 - c) El tráfico generado en la red de telefonía móvil a cargo del sujeto pasivo, terminado dentro de la red de telefonía fija o móvil a su cargo, en minutos.
 - d) El total de tráfico internacional generado en la red de telefonía móvil a cargo del sujeto pasivo, en minutos, no importando el operador de puerto internacional que lo cursó o transportó.
- 5) **Red o red de telefonía móvil:** Red comercial de telecomunicaciones que permite generar tráfico de telefonía móvil.
 - 6) **Registro detallado de telecomunicaciones:** Mecanismo o sistema que registra cada una de las telecomunicaciones que conforman el tráfico de telefonía móvil.
 - 7) **Administración Tributaria:** La Superintendencia de Administración Tributaria.

ARTÍCULO 10. Hecho Generador. Constituye hecho generador de este impuesto la operación del tráfico de telefonía móvil generado en la red a cargo del sujeto pasivo.



00000077

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 11. Sujeto Pasivo. Son contribuyentes de este impuesto las personas individuales o jurídicas operadores de telefonía móvil, en cuya red a su cargo se genere tráfico de telefonía móvil.

ARTÍCULO 12. Tipo Impositivo. El tipo impositivo de este impuesto es de quince centavos de quetzal (Q 0.15) por cada minuto de tráfico de telefonía móvil generado en la red a cargo del sujeto pasivo.

ARTÍCULO 13. Base Imponible. Constituye base imponible de este impuesto el total del tráfico de telefonía móvil generado en la red a cargo del sujeto pasivo, en minutos o fracción de minuto, durante el periodo impositivo respectivo.

ARTÍCULO 14. Período Impositivo. El período de imposición es mensual y se computará por cada mes calendario.

ARTÍCULO 15. Determinación y pago. El impuesto se determina multiplicando el tipo impositivo por el total de tiempo de tráfico de telefonía móvil expresado en minutos y fracción de minuto, que se genere en la red a cargo de cada sujeto pasivo, en el periodo impositivo que corresponda, mediante una declaración jurada, y deberá pagarse dentro del mes siguiente al periodo impositivo respectivo, utilizando los medios que para el efecto ponga a disposición de los contribuyentes la Administración Tributaria.

ARTÍCULO 16. Destino de los Recursos. De la recaudación anual del Impuesto a la Telefonía Móvil, se destinarán específicamente al Ministerio de Educación, para los años dos mil diez y dos mil once, un mil doscientos millones de Quetzales (Q1,200,000,000.00); y del año dos mil doce en adelante, un mil millones de Quetzales (Q1,000,000,000.00). El Ministerio de Educación destinará prioritariamente estos recursos para la remuneración de los docentes de los niveles educativos preprimario, primario, básico y diversificado en el área rural.

En caso la recaudación anual del impuesto sea menor a estos montos, la asignación específica para el Ministerio de Educación será la recaudación efectiva. Si la recaudación anual del impuesto excede esta asignación específica, los recursos en exceso se trasladarán a la cuenta Gobierno de la República Fondo Común.

ARTÍCULO 17. Otras obligaciones de los contribuyentes. Además de las obligaciones establecidas en esta ley y en el Código Tributario, los contribuyentes del impuesto están obligados a:

- a) Registrarse ante la Administración Tributaria como contribuyentes de este impuesto, dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de esta ley, o dentro de los treinta días siguientes a que adquieran la calidad de operadores de telefonía móvil.



00000078

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- b) Registrar las operaciones sujetas al impuesto, asentándolas en sus respectivos libros de contabilidad.
- c) Presentar un informe anexo a la declaración jurada a que se refiere el artículo anterior, respecto a sus operaciones de tráfico de telefonía móvil del periodo impositivo que corresponda, con la información siguiente:
1. Volumen total en minutos del tráfico de telefonía móvil generado de la red a su cargo a redes fijas a cargo de otros operadores de telefonía, indicando el tráfico de telefonía con cada uno de los operadores de telefonía.
 2. Volumen total en minutos del tráfico de telefonía móvil generado de la red a su cargo a otras redes de telefonía móviles, indicando el tráfico de telefonía con cada uno de los operadores de telefonía móvil.
 3. Volumen total en minutos del tráfico de telefonía móvil generado de la red de telefonía móvil a su cargo hacia la misma red móvil o la red fija a su cargo, en su caso.
 4. Volumen total en minutos del tráfico de telefonía internacional generado en la red de telefonía móvil a su cargo, no importando el operador de puerto internacional que la cursó o transportó, individualizando el tráfico de telefonía con cada uno de los operadores de puerto internacional.
- d) Tener a disposición de la Administración Tributaria, la información contenida en los registros detallados de telecomunicaciones, así como cualquier otra información sobre el tráfico de telefonía móvil, para efectos de fiscalización.

ARTÍCULO 18. Infracciones y sanciones. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, serán sancionadas conforme a lo previsto en el Código Tributario y en el Código Penal, según corresponda.

ARTÍCULO 19. Órgano de administración. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, la administración de este impuesto, que comprende su recaudación, control, aplicación y fiscalización.

La Superintendencia de Telecomunicaciones deberá brindar apoyo técnico e información en los aspectos propios del campo de las telecomunicaciones, a la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando ésta se lo requiera.

La Administración Tributaria podrá instalar o hacer instalar dispositivos de control que le permitan obtener información sobre el tráfico de telefonía móvil de los contribuyentes.

- 17 -

INICIATIVA 4145
DICTAMEN FAVORABLE



09000079

*Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 20. Intercambio de Información. La Superintendencia de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Administración Tributaria están obligadas a intercambiar la información proporcionada por los operadores de telefonía móvil respecto al tráfico de telefonía móvil, en forma detallada, sin incluir los impuestos pagados y demás datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y otras leyes. Dicho intercambio de información deberá ser periódico, en periodos no mayores de seis meses.

CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 21. Se reforma el Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus Reformas. Se adiciona el numeral 11. al artículo 358 B, con el texto siguiente:

"11. Quien simule, oculte, modifique, maniobre o de cualquier forma altere el contenido de los registros detallados de telecomunicaciones, así como de cualquier otro registro, con el objeto de menoscabar el pago del impuesto."

ARTICULO 22. Existencias de papel sellado especial para protocolos. A partir de la vigencia del presente Decreto, el Papel Sellado Especial para Protocolos en existencia en la Administración Tributaria, se continuará vendiendo hasta agotarlo. Para el efecto, la Administración Tributaria habilitará cada hoja a diez quetzales (Q10.00).

Los notarios que tengan existencia de Papel Sellado Especial para Protocolos en su poder deberán adherir a cada hoja timbres fiscales para completar el valor de diez quetzales (Q10.00) que establece esta Ley.

ARTICULO 23. VIGENCIA. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el uno de enero del año dos mil diez, y será publicado en el diario oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO DOS MIL NUEVE.



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

Guatemala, 1 de Diciembre de 2009.

Señor Presidente del Honorable Congreso de la República
Señoras y Señores Diputados, Honorable Pleno:

En cumplimiento de instrucciones del Partido Unionista, institución política a la que pertenezco en el Congreso de la República y en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, suscribí el dictamen favorable emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda el 1 de Diciembre de 2009 en relación con la iniciativa de Ley con registro número 4145 de la Dirección Legislativa, que dispone aprobar Disposiciones de Apoyo Financiero a Gobiernos Municipales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana, con el fin de que pudieran completarse once firmas de los 21 miembros de la Comisión y así lograr la mayoría mínima necesaria para que la iniciativa pudiera continuar con el proceso legislativo en el pleno del Congreso de la República.

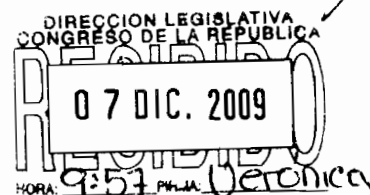
Sin embargo, el voto en dicho dictamen fue razonado por su servidor en los términos que se expresa a continuación, como funcionario público al servicio del Estado y en mi calidad de diputado representante del pueblo, electo por el distrito central ante el Congreso y con la irresponsabilidad que gozo por mis opiniones, mi iniciativa y la manera de tratar los negocios públicos, garantía establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala.

1. ECONOMÍA NACIONAL:

Es obligación del Estado orientar la economía nacional para incrementar la riqueza, tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, pudiendo actuar y complementar la iniciativa y la actividad privada, pero bajo el sano principio de que el Estado no debe hacer por otros lo que ellos pudieran y debieran hacer por sí mismos.

2. DESARROLLO ECONÓMICO:

El desarrollo socioeconómico no depende de las finanzas públicas ni de la cooperación internacional, por lo que es necesario incrementar las inversiones productivas, generadoras de empleos debidamente remunerados. Las políticas económicas públicas deben propiciar un crecimiento económico sostenido del producto interno bruto de por lo menos el seis por ciento anual, que permita una política social de bienestar social que atienda con prioridad seguridad, justicia, salud, nutrición, educación, capacitación para el trabajo, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al empleo productivo e ingresos dignos.





Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

3. POLÍTICA FISCAL:

La política fiscal (ingresos, egresos y endeudamiento del Estado), es fundamental para el desarrollo socioeconómico estable y sostenible, debiendo priorizar el gasto y la inversión social en seguridad ciudadana, justicia, salud, educación e infraestructura básica de apoyo a la producción, el trabajo y la competitividad de la economía, para la generación de empleos productivos, procurando la prosperidad y bienestar de la población. Lo fiscal es una moneda de dos caras: el anverso es el gasto y la inversión pública, mientras el reverso son los ingresos y el endeudamiento público. Estas dos caras de la misma moneda no pueden, ni deben verse ni tratarse por separado.

4. SISTEMA TRIBUTARIO:

Constitucionalmente está establecido que el sistema tributario debe ser justo y equitativo, estructurado conforme al principio de capacidad de pago, universal, obligatorio y que estimule el ahorro y la inversión.

5. CARGA TRIBUTARIA:

Para hacer frente a las tareas del crecimiento económico, del desarrollo social, seguridad, justicia, paz y gobernabilidad del país, la carga tributaria en relación al producto interno bruto debería situarse en al menos el 13.2 por ciento, equivalente a un incremento del 50 por ciento de la presión tributaria vigente en 1995, de conformidad con los Acuerdos de Paz. En el año 2007 se alcanzó una carga tributaria de 12.3 por ciento en relación al producto interno bruto, pero en los últimos dos años esta presión se redujo al 9.9 por ciento.

6. PACTO FISCAL:

El 25 de Mayo del 2000, en un acto histórico, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y grupos empresariales organizados, suscribieron el Pacto Fiscal, concluyendo un proceso iniciado dos años antes y que demostró que los guatemaltecos somos capaces de llegar a grandes consensos. Este Pacto, cuyos principios mantienen plena vigencia, se sustenta sobre ocho ejes principales: (a) Balance Fiscal; (b) Ingresos del Estado; (c) Administración Tributaria; (d) Gasto Público; (e) Deuda Pública; (f) Patrimonio Público (g) Evaluación y Control; y, (h) Descentralización Fiscal. Por consiguiente, en mi opinión, cualquier esfuerzo serio y sostenible en materia fiscal, debe retomar el camino trazado y aún pendiente de caminar, que quedó cubierto por el paraguas de dicho Pacto.

7. GRUPO PROMOTOR DEL DIÁLOGO FISCAL:

El Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, basándose en los ejes y los principios del Pacto Fiscal, decidió enfatizar el análisis y la propuesta de mejoras del Sistema



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

Fiscal de Guatemala desde dos perspectivas: (a) Calidad y Transparencia del Gasto; y, (b) Ingresos y Administración Tributaria. Estas son las dos caras de una misma moneda, la Fiscal, y no solamente la tributaria a que se refiere la iniciativa 4145 que dispone aprobar Disposiciones de Apoyo Financiero a Gobiernos Municipales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana. La Iniciativa de mérito, es una versión parcial, incompleta, modificada y alejada de la propuesta del Pacto Fiscal y que el Grupo Promotor precitado planteó a la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), quien la entregó al gobierno de la República, recién iniciado el periodo 2008-2012 de la actual gestión gubernamental.

8. GASTO PÚBLICO:

El Grupo Promotor del Diálogo Fiscal planteó la necesidad de que la política de gasto público se oriente por una visión de desarrollo de largo plazo, como parte de un proyecto de Nación, para lo cual debe responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico con estabilidad. El gasto público debe enmarcarse en los principios y compromisos establecidos en el Pacto Fiscal, en cuanto a que: (a) El gasto social prioritario no debe utilizarse como mecanismo de ajuste para nivelar las cuentas fiscales en períodos de crisis o recesión; por tanto, el gasto social no deberá disminuir, en términos reales y como proporción del PIB. (b) La política económica debe mantener una relación congruente entre gasto público y producción nacional, como establece la Constitución Política de la República en su artículo 119, inciso m), la política económica y de gasto público deberán ser proactivas privilegiando la inversión productiva sobre la especulativa. (c) La inversión pública no podrá ser inferior al 4% del PIB por año, siendo urgente la concreción de una Ley de Participación Pública Privada para la inversión en infraestructura, con el fin de reforzar este objetivo. (d) Debe asegurarse la idoneidad del gasto público, así como su mayor eficiencia, racionalidad y transparencia, con altos grados de ejecución. En este sentido, es necesario evaluar la calidad y el impacto del gasto público, impulsando la puesta en marcha y operación plena del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema de Indicadores de Gestión, que permita evaluar y retroalimentar la eficiencia y eficacia del gasto, incluyendo sus características de progresividad.

9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

Instrumentos como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y Guatecompras han contribuido a mejorar la transparencia del gasto público, pero los avances son insuficientes. Lamentablemente se ha abusado del uso de fideicomisos y transferencias a organismos no lucrativos (ONGs) o a entidades internacionales para realizar gastos que no están sujetos al control público (Ley de Contrataciones del Estado) y a auditorías de la Contraloría General de Cuentas. En este sentido, deben emprenderse acciones sustantivas para garantizar la legitimidad del esfuerzo tributario vía mejoras en la transparencia, como garantía de la confianza ciudadana en la intervención estatal. Deben completarse y sostenerse los avances logrados en la implementación y operación de sistemas de información fiscal, extendiendo la cobertura del Sistema de Administración Financiera (SIAF) al resto del sector público no financiero, asegurando la publicación de los datos e informes.



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

Asimismo, debe propiciarse el apoyo institucional al desarrollo del sistema Guatecompras, debidamente priorizado, independiente e integrado, a efecto de lograr saltos de calidad y publicidad que lo coloquen al mismo nivel que otros sistemas similares a escala latinoamericana y mundial. El Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) en coordinación con la Contraloría General de Cuentas, deben asesorar y apoyar a las municipalidades sobre las prioridades del gasto social, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Urge el fortalecimiento técnico de la Contraloría General de Cuentas, especialmente del Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG), que es parte del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para facilitar las funciones de fiscalización de parte de la Contraloría, del Congreso de la República y de la sociedad en general.

10. SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD:

Deben establecerse mecanismos que aseguren que todas las entidades que tengan a su cargo programas de gasto financiados con fondos públicos transparenten plenamente sus operaciones, informando pública y oportunamente el destino de los recursos bajo su responsabilidad. Junto al fortalecimiento de la recaudación tributaria, debe legislarse para fortalecer la transparencia de la ejecución del gasto de las entidades descentralizadas y autónomas, así como del gasto que se ejecuta a través de fideicomisos y convenios con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. En particular, debe avanzarse en regular lo siguiente: (a) Los ciudadanos tienen derecho a obtener en cualquier momento, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, en aplicación intensiva y extendida de la Ley de Libre Acceso a la Información. Al mismo tiempo, deben agilizarse las acciones pertinentes a efecto de consolidar el sistema nacional de integridad. (b) Debe prevalecer la dimensión ética de la gestión pública en todas las acciones de todo servidor público, con el fin de asegurar que sean congruentes con la búsqueda del bien común. En este orden de ideas, es indispensable establecer sistemas de evaluación del desempeño ético de funcionarios y empleados, con bases en denuncias comprobadas y sistemas propios y objetivos de control. Para el efecto, cualquier reforma fiscal debe acompañarse de reformas a la Ley de Probidad que incluya temas relacionados con la omisión de declaración jurada patrimonial, procedimientos claros de administración y verificación de datos del sistema de declaraciones juradas patrimoniales; la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito mediante su desarrollo en una ley específica; y, la emisión de un Código de Ética, debidamente institucionalizado. (c) Sin excepción alguna, el gobierno debe elaborar informes periódicos sobre la temática de transparencia, integridad, rendición de cuentas, auditoría social, participación ciudadana y lucha contra la corrupción, a partir de las recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción; para el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; y, otros instrumentos internacionales relacionados con la temática, particularmente contra el soborno en actividades económicas nacionales e internacionales. (d) Extender el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera a todas las entidades descentralizadas, autónomas y las municipalidades.



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

00000084

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

(e) Transparentar la ejecución de gasto público a través de la creación de la figura legal del fideicomiso público, debidamente regulado para garantizar la transparencia, integridad, rendición de cuentas, auditoría social y lucha contra la corrupción, en las operaciones con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. (f) Establecimiento de la obligatoriedad del uso de sistemas como el SIAF, Guatecompras, Guatenóminas, y el Sistema Informático de Gestión (SIGES), al mismo tiempo que se establezcan mecanismos de control que aseguren que los proveedores del Estado cumplan con sus obligaciones tributarias y demás obligaciones contractuales. (g) Incorporar normas de ejecución presupuestaria que permitan el control y oportuna fiscalización, tanto del Ministerio de Finanzas como de los órganos de control del Estado, previniendo prácticas indebidas como la contratación de obras, suministros, servicios o de personal permanente o por contrato, sin contar con la autorización previa correspondiente, tanto jurisdiccional como presupuestariamente.

11. EVALUACION Y CONTROL:

El Pacto Fiscal convino en prestar especial atención a elementos que contribuirían significativamente a mejorar la moral tributaria de los contribuyentes, por medio: (a) del comportamiento ético de los servidores públicos; (b) del control de la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos; (c) el combate a la corrupción e impunidad; (d) la efectiva rendición de cuentas; (e) transparencia y libre acceso a la información; (f) la evaluación de la administración pública; y, (g) la auditoría social. Lamentablemente, la credibilidad de los contribuyentes se ha visto erosionada por la ausencia de legislación moderna y eficaz, mecanismos y prácticas para perseguir y castigar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, las redes de organizaciones criminales dedicadas a la corrupción y defraudación, que, en mi opinión, deberían acompañar cualquier esfuerzo serio en materia fiscal y principalmente tributario.

12. PRECARIEDAD FISCAL:

Los ingresos tributarios son insuficientes para atender un gasto público preocupantemente creciente, desordenadamente expansivo y descontrolado, que genera desconfianza, exacerbada por los casos ventilados públicamente de enriquecimiento ilícito y de funcionamiento de redes público-privadas de corrupción. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado presenta una brecha o déficit creciente e insostenible por la ausencia de suficientes recursos, al mismo tiempo que el Estado está llegando a límites preocupantes de endeudamiento público.

13. MANEJO DE LA CRISIS ECONÓMICA

En un año de franca reducción de los ingresos tributarios, el gobierno hizo esfuerzos por ejecutar políticas anticíclicas de cara a la crisis financiera y económica internacional que, junto al manejo moderado y relativamente prudente de las variables macroeconómicas, logró una caída menos pronunciada del ritmo de la



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

actividad económica, teniendo en cuenta, también, la capacidad instalada, de reacción y ajuste del sector privado productivo, que participa con el 85 por ciento en la generación del producto interno bruto. El impacto en los sectores productivos y en el empleo ha sido significativo, situación de la cual aún no se han recuperado y todavía falta para retornar al crecimiento económico del 6.3 por ciento sobre el producto interno bruto del año 2007; no obstante, debe reconocerse que se han mantenido políticas macroeconómicas que están permitiendo sobrellevar y superar la crisis con menor impacto que en otras economías similares y a nivel mundial.

14. DESBORDE PRESUPUESTARIO

En un año como el 2009, en que el error de cálculo entre la estimación de ingresos y la realidad se ubicará en alrededor de cinco mil millones de quetzales, el presupuesto de egresos del Estado mantuvo un nivel creciente de gasto y de compromisos de inversión que excedieron con creces los techos autorizados, especialmente en los ramos de educación, salud e infraestructura. En una práctica totalmente heterodoxa y francamente inaceptable, el gobierno decidió exceder los límites presupuestarios y los techos autorizados en los renglones de gasto e inversión, contratando a miles de maestros sin contar con los recursos presupuestarios para pagarles, ampliar por encima de los techos de disponibilidad financiera los servicios de salud y otorgar o ampliar contratos de construcción de obra pública muy por encima de las posibilidades fiscales. Aunque la decisión política de cumplir irrestrictamente con la gratuidad de la educación y la salud es plausible, el hacerlo sin contar con el presupuesto necesario es francamente cuestionable, creando deuda flotante tanto con el magisterio como con salud, así como en el Ministerio de Comunicaciones, impagable por la insuficiencia de fondos, que a estas alturas complica seriamente las posibilidades de ajuste del presupuesto a los ingresos reales del Estado.

15. INICIATIVA DE NUEVOS IMPUESTOS Y AUMENTO DE EXISTENTES:

En este contexto, surge la iniciativa 4145, que pretende aumentar impuestos mediante la duplicación del Impuesto de Solidaridad con un cien por ciento de incremento que afectaría a buen número de los 99 mil contribuyentes del régimen optativo del Impuesto sobre la Renta, que se supone generaría mil novecientos millones de quetzales; la creación del impuesto a la telefonía móvil de quince centavos por minuto de llamada, que cubrirá a más de 14 millones de líneas telefónicas reportadas por los operadores de este servicio, que produciría mil trescientos treinta millones de quetzales; aumento del impuesto sobre la renta en un 20 por ciento, incrementando el tipo impositivo de 5 a 6 por ciento, que afectará a 176 mil contribuyentes del régimen general del impuesto sobre la renta, que generaría quinientos setenta millones de quetzales más; y, aumento del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, que produciría doscientos millones de quetzales más. En la mejor de las estimaciones, la recaudación generada por esta reforma tributaria llevaría alrededor de cuatro mil millones de quetzales a las arcas públicas. Además, falta crear los espacios presupuestarios.



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

16. DESTINO ESPECÍFICO, TEMPORAL Y DECRECIENTE

La iniciativa de reforma fiscal bajo análisis propone que el producto de los impuestos sea destinado a fines específicos, los cuales son temporales y decrecientes. No se plantea una propuesta de seguimiento y aseguramiento del financiamiento de los sectores destinatarios de la reforma, de cara al mediano y largo plazo. Por ejemplo, uno de los sectores beneficiados serán las Municipalidades del país, tema de particular interés para un diputado distrital como su servidor, lo que contribuye al fortalecimiento de la descentralización pero lamentablemente la iniciativa no elabora a favor de una participación decisiva de los gobiernos locales en la recaudación de los impuestos, como coadyuvantes en el control y fiscalización que realiza la SAT. La distribución de los ingresos provenientes del impuesto no queda garantizada; son temporales y decrecientes, creando una dependencia peligrosa de los aportes del gobierno central; además, la propia iniciativa de ley prevé la reducción continua de las asignaciones año con año. Así, (a) La posible asignación a las Municipalidades será únicamente de hasta un mil millones de quetzales en 2010, distribuidos conforme al cálculo de los aportes constitucionales; (b) La misma ley restringe el uso que las Municipalidades puedan hacer de estos recursos: 10% para funcionamiento; 30% para educación; 30% para agua y saneamiento; y 30% inversiones productivas e infraestructura. Aunque parece razonable el criterio planteado, los Alcaldes no podrán decidir el uso de estos fondos en otras necesidades más urgentes y sentidas por la población; por ejemplo, ¿Qué hará Mixco que tanto urge por tener recursos pero para el tema de seguridad?; (c) Si la recaudación adicional por el aumento del Impuesto de Solidaridad no llega a Q.2,700.0 millones, entonces las Municipalidades no recibirán lo que presupuesten por la transferencia de este impuesto, sino el Ministerio de Finanzas le dirá en algún momento cuanto recibirán, volviendo a generar incertidumbre entre Alcaldes. Además, el monto ofrecido por el aumento del impuesto sólo se refiere a la recaudación adicional y no a lo que ya recauda la SAT; en otras palabras, en el presupuesto del Estado 2010 se considera una recaudación del ISO por Q.2,675 millones, pero esto no se distribuirá. Sólo se distribuirá lo recaudado adicional, por encima de este monto; (d) El aporte a las Municipalidades, según la iniciativa de ley, se reducirá en el 2011 a Q.600.0 millones y en el 2012 a Q.500.0 millones. Esto genera un incentivo perverso, porque el gasto en educación, agua y saneamiento se transforma en gasto corriente y al desaparecer la fuente de financiamiento, ya no se puede seguir financiando. Por ejemplo, si la municipalidad de San Juan Comalapa decide contratar 15 maestros a un costo anual por maestro de Q.45,000.00, haciendo un total de 675 mil el primer año. Su techo, por imperio de la ley en discusión, sería de 720 mil quetzales, pero en el segundo año su techo será 435 mil, y en el tercer año será de solo Q.360.0 mil. ¿Qué hará esta Municipalidad?. Finalmente, sin ser exhaustivos de manera alguna, surgen estas y otras preocupaciones en relación con la iniciativa 4145 a las cuales no me refiero en este razonamiento, dada la disposición del Partido Unionista de aprobarla sin mayor análisis, comentarios o enmiendas, sino tal como fue presentada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República.



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

17. FORTALECIMIENTO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA:

La iniciativa de mérito, 4145, lamentablemente descarta el esfuerzo que el actual gobierno realizó durante el año pasado y el presente, mediante la iniciativa 3874 (que luego el partido oficial solicitó retirar del pleno), que abarcaba el fortalecimiento de la SAT para la persecución de evasores, defraudadores y contrabandistas, que contenía: (a) Disposiciones aplicables al sistema aduanero nacional; (b) Reformas al decreto número 27-92 del Congreso de la República, ley del impuesto al valor agregado; (c) Reformas al decreto número 20-2006 del Congreso de la República, disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria; y, (d) Reformas al decreto número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario.

18. SISTEMA ADUANERO NACIONAL:

Para brindarle herramientas legales más eficaces a la SAT, es necesario complementar las disposiciones del CAUCA y RECAUCA a fin de: (a) Normar la relación de los auxiliares de la función pública aduanera con la Administración Tributaria; (b) Obligar a la nacionalizar en frontera, los productos considerados sensibles por la Administración Tributaria; (c) Normar y facilitar las subastas de mercancías que realiza la Administración Tributaria; (d) Precisar las facultades de la Administración Tributaria en zonas portuarias; (e) Modificar el plazo de abandono para mercancías manifestadas en tránsito internacional; (f) Multar las mercancías internadas para maquilas y zona francas, que no sean destinadas al régimen aduanero correspondiente dentro del plazo establecido, en substitución del pago total de tributos vigente actualmente; y, (g) Crear sanciones disuasivas y justas, por infracciones aduaneras. Perseguir el contrabando y la defraudación es esencial.

19. CÓDIGO TRIBUTARIO:

Al mismo tiempo, es necesario reformar el Código Tributario para: (a) Crear la obligación de los notarios a reportar información de contratos relacionados al pago del IVA y del Timbre y Papel Sellado para Protocolos; (b) Facultar a la SAT para requerir a los Bancos del Sistema, información sobre operaciones financieras específicas de contribuyentes, relacionadas con sus declaraciones y pagos de tributos; (c) Autorizar a la SAT a colocar o requerir la colocación de dispositivos de control, que permitan obtener información directamente de los sistemas de fabricación, envasado, llenado, vaciado o transporte; (d) Avanzar en la creación de la administración tributaria virtual (firma electrónica); (e) Crear la obligación de informar el cese o suspensión de operaciones; (f) Implementar el cierre cautelar de empresas que realizan operaciones sin estar inscritas en el RTU, en el entendido que el cierre se levanta inmediatamente después que el contribuyente se haya inscrito en el RTU; (g) Reducir el monto para la obligación de usar medios de pago bancarios para evitar el fraccionamiento de operaciones y lavado de dinero mediante evasión tributaria; (h) Revisar y depurar el sistema sancionatorio, para hacerlo más claro y efectivo; (i) Aclarar las facultades del Directorio de la SAT para resolver vacíos legales o contradicciones en la Ley, aplicando el texto y contexto de la Ley, emitiendo los criterios correspondientes.



Bancada Partido Unionista
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado
José Alejandro Arévalo Alburez
Jefe de Bloque Legislativo
Miembro de Comisiones de:
Finanzas Públicas y Moneda
Economía y Comercio Exterior

20. REFORMA TRIBUTARIA O MODERNIZACIÓN FISCAL:

El razonamiento de mi voto al suscribir el dictamen favorable para la iniciativa de reforma tributaria identificada bajo el número 4145 de la Dirección Legislativa, que dispone aprobar Disposiciones de Apoyo Financiero a Gobiernos Municipales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana, demuestra la necesidad urgente de realizar una evaluación seria y sosegada de la reforma planteada, revisándola cuidadosamente en forma integral, lo cual no ha sido posible en el seno de la Comisión de Finanzas y Moneda porque no se propició debate alguno sobre la misma; además, en mi opinión, es el momento no sólo para analizar y discutir esta iniciativa, sino también para un abordaje completo e integral del tema fiscal, que pasa por legislar y tomar otras medidas y acciones en materia de los ejes establecidos por el Pacto Fiscal, así como considerar con seriedad las recomendaciones de la Comisión Promotora del Diálogo Fiscal, para lograr una modernización fiscal, sostenible y viable legal, política, económica y financieramente.

La decisión del Partido Unionista, al cual pertenezco y me debo en mi calidad de diputado de dicha organización política, ha sido apoyar la iniciativa gubernamental de reforma tributaria contenida en el dictamen favorable a la iniciativa 4145, decisión que acato y por ello he suscrito el dictamen, dejando constancia de las reflexiones anteriores únicamente con el fin de dar forma al razonamiento de mi voto y en el afán de propiciar, de alguna forma, una mejor orientación y debate en el seno del honorable pleno al momento de tomar la decisión de aprobar la Ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

Honorable pleno, muchas gracias por su amable atención.

José Alejandro Arévalo Alburez
Diputado 2008 - 2012
Congreso República de Guatemala